

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 10° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-16120-2019
CARATULADO	: OPTI STORE SPA/SEREMI DE SALUD REGIÓN
METROPOLITANA	

Santiago, diecisiete de Febrero de dos mil veintitrés

VISTOS:

En folio 1, comparece Álvaro Villa Vicent, abogado, en representación convencional de **OPTISTORE SpA**, ambos domiciliados en Huérfanos N°835, piso 12 Norte, comuna de Santiago, quien viene en interponer demanda de reclamación judicial en contra de sumario sanitario en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, órgano de derecho público, representado legalmente para estos efectos por el **CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO**, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su presidente María Eugenia Manaud Tapia, abogada, todos domiciliados en Agustinas N°1687, comuna de Santiago, solicitando se deje sin efecto la sanción que le fue impuesta a su representada por medio de la Resolución Exenta N° 9029, de 31 de Diciembre de 2018, y confirmada por la Resolución Exenta N° 2624, de 22 de Abril de 2019, o, en subsidio, rebajar el monto de la multa impuesta al mínimo, o a la suma que este Tribunal estime, con costas.

Parte haciendo una relación de los aspectos formales relacionados a la interposición de la reclamación, exponiendo que la Resolución Exenta N°2624, de 22 de abril de 2019, le fue notificada a su representada el 8 de mayo de 2019, mediante carta certificada que fuere despachada a su domicilio, por lo tanto la interposición de la presente reclamación se encuentra dentro de plazo, de acuerdo a lo dispuesto en inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario, en relación con lo establecido en el inciso 2 del artículo 54 de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Posteriormente procede a hacer una exposición del contenido de las resoluciones exentas N°9029, de 31 de diciembre de 2018, surgió de un sumario sanitario llevado en contra de su representada, en el cual se le acusa de “tener un equipamiento para atender personas que sufren problemas a la vista” dentro de un



Foja: 1

establecimiento en que se comercializan lentes ópticos, lo que determino que se le impusiera una multa de 25 UTM. Detalla que en contra de aquella resolución su representada recurrió de reposición administrativa, en la cual sostuvo que el hecho reprochado no era constitutivo de infracción alguna, pues el equipamiento citado estaba destinado a la realización de actividades relacionadas con la contactología y no a otras. No obstante lo anterior, aquella reposición fue rechazada por medio de la Resolución Exenta N°2624, de 22 de abril de 2019, manteniéndose la multa.

Continúa pormenorizando los argumentos por los cuales el hecho reprochado en la resolución sanitaria no es constitutivo de infracción, exponiendo que tener el equipamiento en cuestión no es una infracción, si no que por el contrario, constituye una obligación para la realización de las actividades a que se refieren los artículos 4, 9 y 10 del Decreto n° 4, de 1985, de Salud, Reglamento de Ópticas. Asimismo no existe normal legal ni reglamentaria que prohíba tener esa clase de equipamiento en una óptica, equipamiento que únicamente se utilizaba para contactología. Añade que en ninguna parte del sumario sanitario se constató que la utilización del citado equipamiento como parte de una consulta profesional o que el mismo se encuentre destinado a medir vicios de refracción, por lo que ninguna infracción fue constatada.

Aduce que la SEREMI en cuestión no puede presumir la realización de actividades que constituyan una infracción o que realizó determinadas actividades con el equipamiento en cuestión. Explica que su representada obtuvo en un recurso de protección y en un requerimiento frente al Tribunal Constitucional, sentencias a su favor para que en el interior de otro establecimiento de óptica que ella posee, pueda contar con profesionales que midan vicios de refracción a los pacientes que lo requieran, no puede servir de fundamento para presumir que en el local objeto de las visitas inspectivas se esté realizando este tipo de actividades.

Reitera que la sanción fue impuesta por el solo hecho de tener un equipamiento, presumiendo la utilización del mismo para fines para los cuales nunca se utilizó.

Arguye que lo dispuesto en el artículo 126 del Código Sanitario, si es que procediere es inaplicable por cuanto atenta contra el derecho de igualdad de su representada y contra el derecho a la libertad del trabajo y su protección, garantías constitucionales amparadas en el artículo 19 N° 2 y nN 16 de la Constitución Política. Señala que el Tribunal Constitucional en autos sobre requerimiento de inaplicabilidad rol N°3519/17 ya estableció la ilegalidad por inconstitucionalidad del artículo 126 del Código Sanitario, que establece la prohibición que se le estaría



Foja: 1

achacando como incumplida a su representada, entendiendo esa "ilegalidad" en términos generales, esto es, como "antijuridicidad", resulta evidente que una norma inconstitucional no puede ser aplicada a este caso en particular.

Concluye que ha quedado en evidencia que su representada ha sido sancionada por un hecho que no es constitutivo de infracción sanitaria y que en todo caso, la conducta que le presume la reclamada como constitutiva de infracción, de ser efectiva, resulta estar amparada en una norma inconstitucional que no puede ser aplicada a este caso, precisamente por los efectos atentatorios contra las garantías constitucionales que la norma del artículo 126 del Código Sanitario.

En folio 9, rola notificación personal practicada a la demandada.

En folio 16, se celebró audiencia de contestación y conciliación, con la comparecencia de las apoderadas de la demandante y de la demandada, contestando esta última por medio de minuta de folio 13, solicitando se rechace la demanda de reclamación interpuesta en su contra por la actora, con costas, en base a los siguientes argumentos:

Expone que el sumario sanitario que da origen a esta sentencia se inició con el acta de inspección de 5 de julio de 2018, oportunidad en la cual funcionarios de la secretaría se constituyeron en la sala de ventas "Ópticas Premium" ubicada en Mac-Iver N°90, comuna de Santiago, de propiedad de la reclamante, con objeto de verificar el cumplimiento de la sentencia sanitaria N°1149, de fecha 11 de febrero de 2016. En el acta de inspección surgida de aquella visita, se constató lo siguiente:

1.- Sala de venta de óptica arriba señalada en funcionamiento;

2.- Acompaña en la visita doña Rossana Gatica Carrasco, persona a cargo del establecimiento atiente la optometrista Ángela Rivera, dejando constancia de que se trata de un local que tiene una sala de entrada o sea es común para ambas actividades;

3.- Se observa al interior de la sala de Procedimientos oftalmológico un equipamiento que comprende a la atención de personas que sufren problemas a la vista.

De tal modo se verificó por los fiscalizadores que no se dio cumplimiento a la Sentencia Sanitaria N° 1149 de fecha 19 de febrero de 2016.



Foja: 1

En virtud de lo anterior se citó a la reclamante para la audiencia de descargos y rendición de pruebas fijada para el día 17 de julio de 2018, ante el Departamento Jurídico la Secretaría Regional Ministerial de Salud, audiencia a la cual concurrió la actora realizando sus descargos, indicando que la consulta profesional de optometría, hoy funciona como una sala de contactología y no otra cosa, refiere que de hecho en el acta no se encuentra constatado el funcionamiento de la consulta profesional, sino la circunstancia de existir al interior del local una sala en donde atiende la optómetra doña Ángela Rivera, donde existe equipamiento optométrico, continua señalando que el equipamiento que existe al interior de dicha sala no es para detectar vicios de refracción, sino que el mismo sirve como sala y equipamiento de contactología y no otra cosa, a cuyo cargo efectivamente se encuentra la optómetra individualizada, refiere a mayor abundamiento que de acuerdo a lo establecido en la Circular A 15/46 de 18 de noviembre 2015 del Sr. Subsecretario de Salud Pública, no se requiere la autorización sanitaria para el funcionamiento de dicha sala de contactología.

Solicita el rechazo de la reclamación, en primer lugar por ser la misma extemporánea, ya que la reclamación fue ingresada el 14 de mayo de 2019, en situación en que la resolución exenta N°2624 de 22 de abril de 2019, fue notificada por medio de carta certificada el 2 de mayo de 2019, motivo por el cual queda en evidencia que no se cumple con el plazo dispuesto en el inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario. Agrega que teniendo en consideración de que el anteriormente referido artículo, hace expresa referencia a lo dispuesto en el artículo 680 numeral 1° del Código de Procedimiento Civil, para estos efectos los plazos para interponer la demanda ante el tribunal civil ordinario se computan en la forma que establece el Código de Procedimiento Civil, cuerpo legal que dispone que los plazos son fatales y de días hábiles, suspendiéndose sólo durante los días feriados, conforme lo disponen los artículos 64 inciso 1°, 65 y 66 del Código de Procedimiento Civil. Es así como se puede concluir que el plazo para interponer la reclamación, venció fatalmente el día 8 de mayo de 2019. Agrega que respecto a la forma en que se debe computar este plazo se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema en roles 17699-2016 y 411-2008.

En cuanto a la existencia del hecho sancionado se expone sosteniendo que como ya se puede evidenciar, la sanción impuesta a la reclamante en el Sumario Sanitario N°2818/2018 fue por haber incumplido la Resolución Exenta N°1149 de fecha 19 de febrero de 2016 y por incurrir en infracción a lo dispuesto en el artículo 126 inciso 2° del Código Sanitario. Ahora bien, la Resolución Exenta N°1149 de fecha 19 de febrero de 2016 aplicó a la demandante una multa de 20 UTM por



Foja: 1

infringir lo dispuesto en el artículo 126 inciso 2° del Código Sanitario. La citada disposición señala lo siguiente: *"Los establecimientos de óptica podrán abrir locales destinados a la recepción y al despacho de recetas emitidas por profesionales en que se prescriban estos lentes, bajo la responsabilidad técnica de la óptica pertinente. En ninguno de estos establecimientos estará permitida la instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos"*. Hace presente que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 166 del Código Sanitario, habiéndose constatado por los inspectores de la SEREMI, la infracción antes señalada, esta se encuentra amparada por una presunción simplemente legal en cuanto a tener por suficientemente acreditada la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios mediante el acta que al efecto levante el funcionario fiscalizador. Continúa arguyendo que conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario la reclamación sanitaria deberá ser desechada si se verifican las tres hipótesis que plantea:

a.- Si los hechos que hayan motivado la sanción se encuentran comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del Código Sanitario.

b.- Si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios.

c.- Si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida.

Explica que a su vez conforme a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, el peso de la prueba recae sobre el reclamante, no sobre quien aplicó la multa, todo esto en concordancia con lo establecido por el artículo 3 inciso tercero de la Ley N°19-880.

Por otra parte explicita que la alegación incoada en estos autos por la reclamante es la misma opuesta en el sumario sanitario, respecto a la cual en aquella oportunidad no presentó prueba alguna para desvirtuar la presunción del artículo 166 del Código Sanitario.

Respecto a la inaplicabilidad alegada respecto del artículo 126 del Código Sanitario, indica que la inaplicabilidad hecha presente por el actor fue pronunciada por el Tribunal Constitucional respecto de otro sumario sanitario, que afectó a otro local del sector, no alcanzando sus efectos al caso de autos. Agrega que el artículo 92 de la Ley 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, dispone que *"la sentencia que declare la inaplicabilidad solo producirá efectos en*



Foja: 1

el juicio en que se solicite", disposición que a su vez se encuentra en consonancia con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 3 del Código Civil.

Luego argumenta que la rebaja del monto de la multa solicitada por la actora es improcedente pues el artículo 174 del Código Sanitario, brinda a la autoridad sanitaria un rango para la aplicación de multas, el que va desde un mínimo de 1/10 UTM a un máximo de 1000 UTM, otorgando de esta forma un margen de discrecionalidad para decidir el contenido preciso de la multa, atendida a la apreciación de su gravedad, entidad y número. Explica que la determinación precisa que realiza la autoridad administrativa respecto de la multa dentro del rango establecido por el ordenamiento jurídico no es otra cosa que el ejercicio de la discrecionalidad que el legislador le ha otorgado para establecer el contenido y entidad del acto sancionatorio. De ello deriva que, en principio, el órgano jurisdiccional no puede dejar sin efecto o modificar el acto administrativo sancionatorio puesto que ello implicaría ejercer función administrativa, a menos que de los antecedentes incorporados en autos, aparezca con claridad y evidencia, que la autoridad sanitaria ha incurrido en una arbitrariedad, cuestión que no ocurre en el caso de marras. De esta manera la autoridad sanitaria teniendo en cuenta todos los factores antes señalados así como el acta de inspección, estimó en uso de sus facultades discrecionales, que la multa administrativa en cuestión debía ascender a la suma de 25 Unidades Tributarias Mensuales.

Posteriormente se llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo.

En folio 18, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que obra en autos.

En folio 40, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en folio 1 comparece Álvaro Villa Vicent, abogado en representación convencional de **OPTISTORE SpA**, quien viene en interponer demanda reclamación de multa sanitaria en virtud del artículo 171 del Código Sanitario, en juicio sumario, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, representada legalmente para estos efectos por el **CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO**, en virtud de los antecedentes de hecho y de derecho presentados en la parte expositiva precedente, los que se tiene por expresamente reproducidos.



Foja: 1

SEGUNDO: Que, la demandada contesto la demanda, solicitando el rechazo de la misma, con costas, en virtud de los argumentos de hecho y derecho que fueron previamente relacionados en la parte expositiva de esta sentencia.

TERCERO: Que, en folio 18 se recibió la causa a prueba fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, a saber:

1.-Efectividad de que los hechos que motivaron la aplicación de la multa, no constituyen infracción a las leyes o reglamentos sanitarios.

2.- Efectividad de encontrarse acreditado en el sumario sanitario respectivo, los hechos que dieron lugar a la sanción aplicada.

3.- Efectividad de haberse deducido la reclamación dentro de plazo legal.

CUARTO: Que, en cuanto a la prueba, la demandante a objeto de acreditar los fundamentos de su demanda, ha producido la siguiente prueba instrumental no objetada de contrario:

En folio 1:

1.- Copia simple de resolución exenta N°009029, de 31 de diciembre de 2018, pronunciada por el Secretario Regional Ministerial de Salud Subrogante de la Región Metropolitana, Omar Cáceres Cuevas.

2.- Copia simple de resolución exenta N°002624, de 22 de abril de 2019, pronunciada por el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce Suazo.

3.- Captura de pantalla de la página de Correos de Chile, número de envío 11810179126612, fecha de entrega 7 de mayo de 2019.

4.- Sentencia del Tribunal Constitucional en causa rol 3519-17-INA, de fecha 13 de noviembre de 2018.

En folio 33:

5.- Sentencia del Tribunal Constitucional en causa rol 6597-2019-INC, de fecha 14 de noviembre de 2019.

6.- Publicación en el Diario Oficial de 18 de noviembre de 2019.

QUINTO: Que, por su parte el demandado produjo la siguiente prueba instrumental no objetada de contrario:

En folio 13:



Foja: 1

1.- Copia simple del sumario sanitario expediente N°2818, año 2018.

SEXTO: Que, de lo relatado por las partes en la etapa de discusión, así como de la prueba ofrecida por las mismas se tiene por un hecho de la causa que la demandante en estos autos fue objeto de un sumario sanitario por parte de la SEREMI de Salud Metropolitana tramitado en el expediente N°2818 de 2018, que fuere acompañado en folio 13 de marras. Es así como la discusión se produce acerca de la procedencia jurídica de la aplicación de la multa, específicamente si el hecho que en criterio de la SEREMI constituye infracción es o no sancionable como tal, y además también discurre en cuanto a si la cuantía de la multa también se encuentra ajustada a derecho. Por otra parte la demandada ha planteado una cuestión de carácter procesal que igualmente debe ser analizada y esto es, si la reclamación ha sido interpuesta dentro de plazo, argumento que por su carácter de presupuesto lógico jurídico de la acción de marras será analizado primero que el resto de las controversias ventiladas en el presente juicio.

SÉPTIMO: Que, para dilucidar si la reclamación de autos fue o no interpuesta dentro de plazo, primero debe recurrirse a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario, que otorga un plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de la sentencia que impone la sanción. Este plazo al ser uno concebido en el contexto de un procedimiento administrativo debe computarse en conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N°19.880, así lo ha fallado la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de 9 de marzo de 2020, rol 25021-2018, el cual en su considerando octavo señala: *“OCTAVO: Que es claro que el plazo para reclamar respecto del pronunciamiento de un recurso de reposición deducido ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta se origina en un procedimiento administrativo al que le es aplicable la Ley N° 19.880. En efecto, la resolución reclamada tiene el carácter de un acto administrativo y su notificación es parte de un procedimiento de tal naturaleza, por lo que resulta obligatorio para efectos de computar el plazo para accionar ante el juzgado civil competente acudir a lo establecido en este último texto legal, pues sólo a partir de la primera resolución que se pronuncie sobre la admisibilidad de la reclamación el proceso se tornará en judicial y le será aplicable la norma prevista en el artículo 50 del Código Civil. En este sentido, es dable concluir que el aludido plazo de cinco días hábiles previsto en el artículo 171 del Código Sanitario es uno concebido dentro de un determinado procedimiento administrativo, de manera que no le resultan aplicables los artículos 64 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pues éstos se refieren a plazos o términos que dicen relación con la marcha o ritualidad del juicio cuando éste ya ha sido planteado ante el tribunal*



Foja: 1

competente, esto es, el juez civil competente.”. Por lo tanto, en consecuencia de lo anterior no se deben contar en su cálculo los días sábados, domingos y festivos.

OCTAVO: Que, habiéndose establecido lo anterior procede aclarar en qué fecha fue notificado el reclamante de la Resolución Exenta N° 2624, de 22 de Abril de 2019, para lo cual se debe recurrir primeramente al expediente N°2818-2018, acompañado en folio 13 de estos autos y que se valora conforme a lo dispuesto en el artículo 1700 del Código Civil, en el cual consta una nómina de cartas certificadas al 30 de abril de 2019, en el cual en el número 6 de la lista se detalla que se envió carta certificada a Max Cristian Schilling Ferrari, representante legal de la demandante en estos autos, respecto de la resolución N°2624-2019, que incide en el expediente 2818-2018, documento que da cuenta de que estas cartas certificadas fueron enviadas al 30 de abril de 2019, más no de su fecha de recepción. Para averiguar esto último se debe recurrir a la copia de la resolución exenta 2624-2019, que fuere acompañada por el actor en folio 1, la cual en sus últimas dos páginas trae abierto el sobre en el cual venia contenida la misma, constando el nombre del destinatario (Max Cristian Schilling Ferrari), así como la dirección de este último y el código de Correos de Chile, N°118107912612. Así mismo, y también en folio 1 se ha acompañado por el reclamante una consulta ingresada en la página web de Correos de Chile respecto del número de envío 1181017912612, en la cual consta que el mismo fue entregado el 7 de mayo de 2019. Estos documentos nos permiten establecer que la fecha en que fue notificada la resolución reclamada es el 7 de mayo de 2019, por lo que el plazo del ya referido inciso primero del artículo 171 del Código Sanitario debe ser contado desde aquella fecha.

NOVENO: Que, en consecuencia, teniendo en consideración que la notificación de la resolución exenta reclamada en estos autos ocurrió el 7 de mayo de 2019, el plazo de 5 días hábiles para interponer la reclamación, contado en conformidad al artículo 25 de la Ley N°19.880, vencía el 14 de mayo de 2019, que es el mismo día en que se ingresó la reclamación de marras y que por lo tanto determina a este Tribunal a establecer que la misma fue deducida dentro de plazo y que en consecuencia se rechaza la defensa de la demandada que sostenía la caducidad de la acción de reclamación.

DÉCIMO: Que, procediendo ahora a la discusión de fondo el análisis debe centrarse en si la conducta que se constituye como infracción en el sumario sanitario efectivamente constituye una infracción de acuerdo a la normativa vigente. Como cuestión previa este Tribunal precisa que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 171 del Código Sanitario, existe un mandato



Foja: 1

expreso para rechazar la reclamación, siempre que los hechos que hayan motivado la sanción se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del referido Código Sanitario y si aquellos hechos constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida.

DÉCIMO PRIMERO: Que, la reclamante ha alegado tanto en estos autos, como en el sumario sanitario, que el equipamiento que mantenía en su tienda no tenía por finalidad atender personas que sufren problemas a la vista, si no que únicamente era utilizado para fines de contactología. De lo anterior se puede concluir que el reclamante en ninguno momento ha alegado no tener el equipamiento del cual se da cuenta, si no ha alegado que el mismo no era utilizado para fines médicos. Lo anterior se puede evidenciar desde la resolución exenta N°1149 de 19 de febrero de 2016, que rola en el expediente administrativo 2818-2018, en la cual en primer lugar se estableció que en la sala de ventas del reclamante operaba una consulta de optometría con pacientes al momento de la visita, frente a lo cual el reclamante efectuó descargos, señalando que no existía una disposición legal expresa que exigiera una delimitación física en un establecimiento de óptica respecto de una consulta de optometría, esta alegación primitiva fue rechazada por el SEREMI de Salud Metropolitano, quien junto con determinar una multa de 20 UTM, ordeno que se fiscalizará la subsanación de las deficiencias sanitarias consignadas en el sumario. Esta resolución exenta N°1149 de 19 de febrero de 2016 fue la que originó a su vez el expediente N°2818.2018, el cual se generó como consecuencia de la fiscalización efectuada por el inspector de la SEREMI don Julio Rebolledo Bosso, quien en su visita constato que no se había dado cumplimiento a lo dispuesto por la resolución exenta N°1149 de 19 de febrero de 2016, en el sentido de regularizar el funcionamiento de la sala de atención de optometría, pues dentro del local seguía funcionando esta, ante lo cual el reclamante alegó que no se prestaban servicios de optometría con ese equipamiento si no únicamente se usaba con fines de contactología, argumento que igualmente fue rechazado en la resolución reclamada en estos autos por parte de la SEREMI de Salud Metropolitana.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, como se pudo evidenciar de lo expuesto en el considerando precedente, el incumplimiento primitivo de la reclamante de autos dice relación con la presencia de una consulta oftalmológica en un lugar que era una óptica, lo que se encontraba (a ese momento), prohibido de acuerdo al inciso segundo del artículo 126 del Código Sanitario, que señalaba que *“En ninguno de estos establecimientos estará permitida la instalación de consultas médicas o de*



Foja: 1

tecnólogos médicos.”. Asimismo luego por medio de la resolución exenta N° 9029, de 31 de Diciembre de 2018 se rechazó la alegación que realizó la demandada por infracción al mismo artículo, resolución en contra de la cual se repuso por la actora de autos y que fue rechazada por la Resolución Exenta N° 2624, de 22 de Abril de 2019, que es la reclamada en estos autos, por la misma razón.

DÉCIMO TERCERO: Que, consta que la frase del artículo 126 inciso segundo del Código Sanitario, que señalaba *“En ninguno de estos establecimientos estará permitida la instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos.”*. Fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional por sentencia rol 6597-2019, de 14 de noviembre de 2019, en proceso de inconstitucionalidad iniciado de oficio en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, incisos primero N° 7 y decimosegundo de la Constitución Política, sentencia que fue acompañada por el actor en folio 33 de autos, y que por lo demás es un hecho de público conocimiento y que determina que para resolver el asunto controvertido en estos autos, se deberá emplear la norma sin aquel párrafo derogado por inconstitucionalidad, es decir, con la norma como consta a día de hoy.

DÉCIMO CUARTO: Que, habiéndose establecido lo anterior y atendido a que el hecho acusado como infracción por el SEREMI de Salud Metropolitano, esto es, la tenencia de equipamiento correspondiente a una consulta médica de optometría, conforme a las disposiciones del Código Sanitario no constituye infracción alguna a la normativa sanitaria, este Tribunal debe acoger la reclamación de autos, debiendo dejarse sin efecto las sanciones aplicadas a la actora por medio de la resolución exenta N° 9029-2018 , como se declarará.

DÉCIMO QUINTO: Que, atendido a lo resuelto precedentemente se torna innecesario pronunciarse acerca de la rebaja de la multa impuesta por la resolución exenta N° 9029-2018.

DÉCIMO SEXTO: Que, siendo totalmente vencida la demandada, se le impondrá condena en costas en virtud de lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

Y, lo dispuesto -además- en los artículos 1437, 1698 y 1700 del Código Civil; 126, 161 y siguientes, 171 y demás pertinentes del Código Sanitario; artículos pertinentes de la Ley N°19.880 y 39, 144, 160, 170, 254, 342 y 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:



Foja: 1

I.- Que **SE RECHAZA** la excepción de caducidad de la acción de reclamación, opuesta por la parte demandada.

II.- Que, **SE ACOGE** la demanda deducida en folio 1 de autos, y en consecuencia se deja sin efecto:

a).- La resolución exenta N° 2624, de 22 de Abril de 2019 del SEREMI de Salud Metropolitano, que resolvió la reposición interpuesta Resolución Exenta N° 9029, de 31 de Diciembre de 2018, por no existir infracción alguna por parte de la demandante;

b).- La Resolución Exenta N° 9029, de 31 de Diciembre de 2018, así como la multa impuesta por esta, al no existir infracción alguna por parte de la demandante.

III.- Que, las costas serán de cargo de la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Pronunciada por doña Karina Portugal Cuevas, Juez suplente del Décimo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diecisiete de Febrero de dos mil veintitrés**

